

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN Medellín, tres (03) de abril dos mil veinticuatro (2024)

Apelación auto
Exp.014-2022-00441-01

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- contra el auto que resolvió las excepciones y dispuso continuar la ejecución dentro del presente proceso ejecutivo a continuación del ordinario promovido por MARCO TULIO VALENCIA OCAMPO.

Conforme a la sustitución aportada por la ejecutada, se reconoce personería al abogado SANTIAGO BERNAL PALACIOS con C.C 1.016.035.426 y T.P 269.922 del CSJ.

ANTECEDENTES:

Por auto que se emitió el 08 de marzo de 2023, el juzgado de conocimiento que lo es el Catorce Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago por la obligación de pagar el retroactivo pensional causado entre el 22 de junio de 1989 y el 02 de agosto de 2012, junto con la indexación de esa condena desde junio de 1989 y hasta el momento del pago, siendo negada la ejecución por intereses legales y costas procesales (Archivo 09).

Luego de ser gestionada en debida forma la notificación, la ejecutada se pronunció formulando las excepciones de prescripción, pago y compensación (Archivo 17). Para fundamentar la de pago, indicó que por resolución SUB 19456 del 26 de enero de 2023 se dio cumplimiento a la sentencia con pago efectuado para la nómina de febrero de 2023, lo que en efecto ocurrió con destino a la cuenta del pensionado Valencia Ocampo.

El Despacho resolvió en audiencia celebrada el 16 de febrero de 2024 las excepciones propuestas (Archivo 31), oportunidad en la que DECLARÓ parcialmente probada la excepción de pago, ordenando continuar la ejecución por la suma de \$30.204.584 por concepto de saldo insoluto de la indexación de las condenas. CONDENÓ en costas a Colpensiones, fijando por agencias en derecho en el equivalente al 10% de la obligación por la cual se ordenó dar continuidad al ejecutivo.

Frente a la anterior determinación, la ejecutada interpuso el recurso vertical solicitando la revisión y modificación frente a los rubros sobre los que se ordenó continuar la ejecución, advirtiendo que no se toma en cuenta la liquidación allegada por la entidad. Indica que lo pedido es que se proceda con la declaratoria del pago total porque no se encuentran sumas diferenciales en favor del ejecutante si se acude al acto administrativo de reconocimiento del retroactivo pensional (Min 1:13:14 Archivo 31).

En esa línea fue concedido en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto.

CONSIDERACIONES:

A partir del artículo 442 del CGP, aplicable por remisión analógica por lo previsto en el art 145 del estatuto adjetivo laboral, en estos asuntos en que la orden de apremio se basa en una sentencia judicial, solo se pueden proponer entre otras excepciones, la relativa al pago de la obligación, imponiéndole al ejecutado, la misma disposición, que al proponerla se alleguen los medios de prueba en los que se funda.

Así es, pues por pago se entiende la prestación de lo que se adeuda, según el art 1626 del Código Civil, correspondiéndole acreditar la extinción de la obligación por este medio, a quien la alega, según el artículo 1757 del mismo estatuto.

En ese orden, sería del caso definir si con los pagos efectuados por la ejecutada conforme se extrae de la Resolución SUB 19456 del 26 de enero de 2023 (Archivo 12) está cubierta la obligación perseguida para dar por terminado el proceso de ejecución, si no es porque verifica esta Sala un defecto técnico en la sustentación del recurso que impide su estudio.

La anterior conclusión se deriva de lo que la mandataria en el argumento del recurso ha esbozado, donde pretende que sea el superior el que revise los pagos de cara a la obligación exigible, invocando de forma simple a la remisión del acto administrativo de cumplimiento emitido por Colpensiones.

Sobre este punto, es preciso anotar que el recurso de alzada no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudir a él en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en un yerro o equivocación, lo que quiere decir que los reparos deben exponerse de forma puntual de manera que las discrepancias sean tan claras frente a la providencia dictada, que el superior pueda partir de unos reproches concretos para dar o no razón a los argumentos o parámetros dados por el Juez.

Entonces, a la parte recurrente le incumbía ineludiblemente desarrollar uno a uno los puntos de divergencia acudiendo a la inconformidad precisa a través de la cual funda sus pagos de cara a la obligación liquidada, para que a partir de lo que halló errado, inexacto u omitido de la providencia atacada para definir el pago total pueda promoverse su revisión como es pedido, encontrando que contrario a ello, acude a una solicitud general

incluso con un único argumento para varios procesos que hicieron parte de la decisión del Juzgado -014-2023-00192 y 014-2023-00085- sin destacar los aspectos que dan lugar a la misma de cara a cada uno de los asuntos, con lo que no se habilita la confrontación requerida que implica detectar de cada decisión emitida algún yerro, ausencia de apreciación probatoria o falta de valoración, puesto que estaba en cabeza de la ejecutada delimitar las falencias de los argumentos de la decisión con mención de lo debido y lo cancelado para dar apoyo a su dicho referido a que a la fecha la deuda se halla saldada y de ese modo, derruir los argumentos del Juez y obtener la revocatoria buscada, máxime cuando el fallador acudió de manera específica a la situación del ejecutante, señalando que Colpensiones no consultó la fórmula ya decantada doctrinaria y jurisprudencialmente para el cálculo de la indexación en su fórmula, dando el valor de ese concepto por la suma de \$179.670.670 (Min 52:50 -56:01 Archivo 31), no siendo posible que se atribuya a quien decide en segunda instancia la exploración de los desatinos del *a quo* para proceder a corregirlos, pues es esa precisamente y no otra la labor de la mandataria judicial al momento de acudir a la vía de la apelación con su correlativa sustentación, no encontrando suficiente la afirmación referida a que existe un acto administrativo y una liquidación de la entidad para establecer lo que en efecto fue pagado, siendo que al observar que la obligación prestacional había sido cancelada en su totalidad, era necesario revelar de su parte la causa a su juicio del desacierto en los cálculos o la documental tomada como base para dar certeza a su afirmación, o si era el caso, los parámetros correctos empleados por la entidad que derruyen los argumentos del Juez, lo que no ocurrió al pretender sustentarse el recurso vertical, lo que conlleva a que no sea viable dar trámite al mismo.

En consecuencia, se inadmitirá el recurso de apelación y se dispone el envío del expediente al juzgado de origen para que continúe con su trámite.

Sin costas en esta instancia.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, se **INADMITE** el recurso de apelación presentado frente al auto proferido el 16 de febrero de 2024, dejándose sin efectos el auto proferido el 14 de marzo de 2024 que dio cabida a ese medio de oposición. **ENVÍESE** el expediente al juzgado de origen. Sin costas.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

El Magistrado,



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 056 fijados el 04 de abril de 2024 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.